España supera en gasto social a Alemania, Canadá, Dinamarca y Japón

La pandemia disparó el gasto social del 24,6% en 2019 al 31,2% en 2020, 6,6 puntos en un año

INFORME/ España fue el sexto país de la OCDE con mayor gasto público social en 2022, con un 28,1% del PIB, cifra equivalente a más de 350.000 millones, 7 puntos más que el promedio de los países desarrollados.

J. Díaz. Madrid

España es uno de los países desarrollados más rezagados en la recuperación de los niveles de PIB previos a la pandemia, algo que, según los expertos, no sucederá probablemente hasta 2024; sin embargo, se encuentra en el pelotón de cabeza de las economías que más han disparado su gasto público social en los últimos años. Esa dicotomía se traduce en un incremento de la deuda pública, que en noviembre pasado marcó récord histórico por encima de 1,5 billones de euros (a pesar de que su peso sobre el PIB se moderó al 115,9% por el repunte económico) y en el desequilibrio entre ingresos y gastos. El año pasado, el gasto público social en España se situó en el 28,1% del PIB (alrededor de 350.000 millones), el sexto más alto entre los 38 países que integran la OCDE, según las estimaciones publicadas ayer por el club de las economías más desarrolladas del planeta. Unos ingentes recursos destinados a pensiones, sanidad, funcionarios, prestaciones por desempleo o planes anticrisis, primero por la pandemia del Covid y ahora por la guerra en Ucrania.

Con ese porcentaje, el gasto social en España se situó en 2022 siete puntos por encima del promedio de la OCDE (21,1%) y superó al de países con sólidos Estados de bienestar como Alemania (26,7% del PIB), Dinamarca (26,2%), Canadá (25,5%) o Japón (24,8%). Lideraron el ránking Francia, cuyo gasto en servicios públicos alcanzó el 31,6% del PIB y que ahora afronta una fuerte contestación social por su reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación a los 64 años; e Italia, que destinó el 30,1% de su producto interior bruto al gasto social. Les siguieron Austria, con el 29,4%, y Finlandia y Bélgica, ambos países con el 29%.

Salto cuantitativo

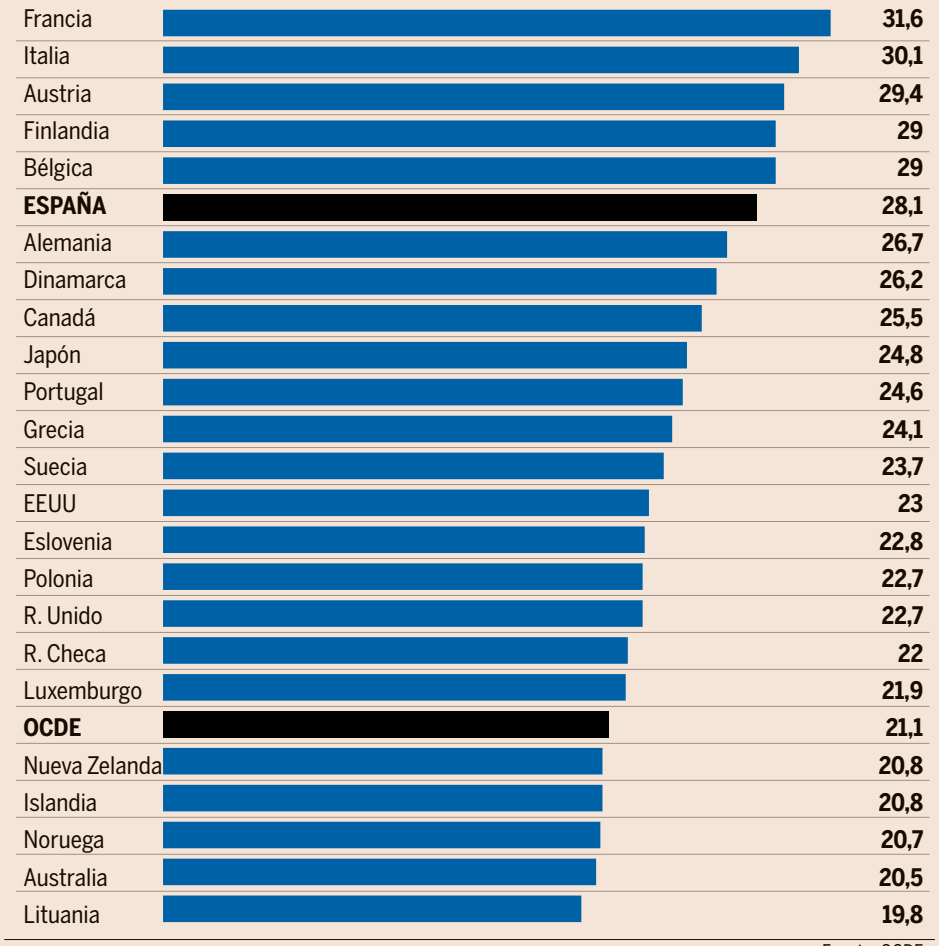
En 2019, antes de que el Covid provocara un terremoto en la economía mundial y obligara a los gobiernos a desplegar un escudo económico y social sin precedentes, el gasto social en España se situaba en el 24,6% del PIB, 4,5 puntos por encima de la media de la OCDE, pero inferior al de países como Alemania (25,6%) o Dinamarca (28,4%). La pandemia catapultó esas cifras hasta cotas inéditas, elevando la ratio española hasta el 31,2% en 2020; esto es, 6,6 puntos en apenas un año, la segunda mayor subida tras la registrada por Canadá, que pasó del 18,6% al 25,5% (6,9 puntos).

Aunque el desplome de la economía por la crisis del Covid tuvo que ver en ese fuerte salto cuantitativo en la ratio de gasto sobre PIB, la OCDE matiza que "más del 80%" de ese incremento se debió al fuerte impulso del gasto y no al varapalo sufrido por la economía, que en el caso de España fue finalmente una contracción del 11,3%. Al igual que en el resto de países, en España la ratio de gasto sobre PIB se relajó al 29,5% en 2021 y al 28,1% en 2022, gracias a la remontada económica, que hizo bajar el peso relativo del gasto, pero también al descenso de los capítulos relacionados con el Covid, como los servicios sanitarios, las prestaciones por desempleo o los ERTE, que llegaron a afectar a más de 3,6 millones de trabajadores en los momentos álgidos de la pandemia y que en octubre pasado apenas superaban los 30.000. Sin embargo, el estallido de la guerra en Ucrania y la escalada inflacionista han impedido una mayor reducción de esa ratio, al forzar a los Estados a extender de nuevo una red de seguridad vía subsidios, bajadas puntuales de impuestos y otro tipo de ayudas, para combatir el zarpazo de los precios y de los costes energéticos.

Pero el problema va más allá del aumento coyuntural de los gastos provocado por la nueva crisis, ya que parte importante de ese incremento ha venido para quedarse, haciéndose estructural en ámbitos como las pensiones y el sistema sanitario, de hecho los dos mayores capítulos de gasto público social. En promedio, el gasto en pensiones en la OCDE representaba el 7,7% del PIB en 2019 (últimos datos disponibles). Ya entonces España superaba con creces la media de los países desarrollados, con un 11,3%, la séptima más alta de toda la OCDE. Esa ratio se ha elevado ya al 11,7% en el promedio de los últimos doce meses, peso sobre el PIB que irá *in crescendo* en los próximos meses. Primero, porque la nómina de las pensiones no para de crecer por el aumento del número de beneficiarios. Y segundo, por la revalorización de las prestaciones con el IPC (un 8,5%), un alza que consolida en el gasto público y que, en un contexto de frenazo económico, disparará este año su peso sobre el PIB.

EL RANKING DEL GASTO SOCIAL EN LA OCDE

Porcentaje de gasto público social en relación al PIB en 2022.



Expansión — Fuente: OCDE

El Gobierno promociona en Bruselas la candidatura de Madrid para la sede antiblanqueo europea

Nacho P. Santos. Madrid

El Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid promocionaron ayer en Bruselas la candidatura de la capital española para acoger la sede de la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).

Representantes del consistorio madrileño, institución que lidera la candidatura, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, mantuvieron ayer reuniones para impulsar esta candidatura con los eurodiputados responsables de evaluar el proceso y la dirección general de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales.

Sobre los puntos fuertes de Madrid para acoger la sede de la AMLA Cuerpo puso en valor que "España está firmemente comprometida con la implementación de los estándares internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, situándose como uno de los países mejor calificados del mundo en cuanto a la efectividad de su sistema de prevención y solvencia técnica, operacional y efectiva". En este sentido, desde la candidatura resaltan que España es actualmente el único país en el mundo con una calificación de 'sustancial' o 'alto' en 10 de los 11 "resultados inmediatos" evaluados por el Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI). Añaden que España es "el mejor país de la UE y se encuentra entre los cuatro mejores países del mundo en la producción y uso de la inteligencia financiera, siendo, además, uno de los dos únicos países de la UE que ha obtenido la máxima calificación en la implementación de las medidas preventivas por parte del sector privado".

Por su parte, la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, destacó que Madrid "ofrece un edificio en el centro financiero de la ciudad, con los mayores estándares de sostenibilidad y perfectamente comunicado", y que la ciudad "dispone de las mejores condiciones para vivir y trabajar" y cuenta "con las mejores infraestructuras digitales y de transporte, que hacen de ella uno de los destinos preferidos por los profesionales".

La designación de la sede, por la que Madrid competirá con Luxemburgo, Fráncfort, París, Riga, Viena y Vilna, tendrá lugar en la segunda mitad de 2023, con el objetivo de que AMLA empiece a funcionar a comienzos de 2024.

JMCadenas

José Luis Martínez–Almeida, alcalde de Madrid.